



OPINIÓN

Santiago sigue siendo Chile

Diego Benavente,
ingeniero civil y regionalista



En Chile pese al avance en términos económicos y en diversos sectores, su infraestructura sigue siendo un punto débil que afecta tanto la calidad de vida de sus habitantes como el desarrollo a largo plazo de su economía. Esta infraestructura, a menudo frágil y mal planificada, es uno de los mayores desafíos del país y está estrechamente ligada a la falta de una estrategia clara y coherente que contemple tanto la expansión como el mantenimiento de los servicios esenciales.

Uno de los mayores problemas de la infraestructura en Chile es la ausencia de una red de respaldo efectiva para los servicios básicos. Por ejemplo, el sistema eléctrico, que en muchas ocasiones sufre de cortes inesperados debido a la falta de mantenimiento o a la vulnerabilidad frente a desastres naturales. Las redes de agua potable y alcantarillado, por su parte, también presentan deficiencias, especialmente en zonas rurales o en las periferias de las grandes ciudades. Esto es particularmente grave porque la infraestructura básica es un pilar fundamental para el desarrollo social y económico de cualquier nación. En situaciones de emergencia, la falta de sistemas de respaldo efectivos puede ocasionar crisis mayores que afectan directamente a la población.

La situación se ve agravada por una burocracia estatal obsoleta y completamente ineficiente. Esta no depende de un partido político en particular, sino que es una constante que ha perdurado en Chile a lo largo de los años. La burocracia no solo es lenta, sino también incapaz de adaptarse a las necesidades de la ciudadanía. Esto se debe, en parte, a la falta de modernización de las estructuras del Estado y de un enfoque integral que permita una gestión más eficiente de los recursos.

La lentitud del aparato estatal no solo afecta la resolución de problemas inmediatos, sino que también contribuye a una falta de confianza por parte de la ciudadanía en las instituciones públicas. En muchos casos, los ciudadanos se ven obligados a recurrir a soluciones privadas o a asociaciones con empresas, lo que genera una segmentación de la calidad de los servicios según la capacidad económica de los individuos. Esto, a su vez, incrementa las desigualdades entre distintos sectores de la sociedad.

Asimismo la falta de coordinación entre el Estado y el sector privado, que - en teoría - ambos deberían colaborar para desarrollar y mantener la infraestructura del país, la realidad es que las iniciativas a menudo se desarrollan en paralelo, sin una visión común. Esto genera proyectos que, en ocasiones, terminan siendo redundantes o mal planificados, sin tomar en cuenta la necesidad de una integración efectiva entre las partes. En lugar de un trabajo conjunto que optimice los recursos y permita una mejor cobertura de servicios, se dan situaciones donde tanto el Estado como las empresas privadas actúan de manera aislada, lo que genera duplicidad de esfuerzos y malgasto de recursos.

El reciente 31 de marzo el día de las regiones, que pasó sin pena ni gloria, se pudo constatar que la concentración de poder en la Región Metropolitana ha generado una infraestructura robusta en Santiago, pero el resto del país, en particular las regiones más alejadas, sufre una infraestructura insuficiente y de baja calidad. Esto genera una desconexión entre las distintas partes del país, limitando el acceso equitativo a servicios y recursos. Las regiones del norte y del sur del país, al igual que La Araucanía, por ejemplo, siguen enfrentando dificultades para acceder a una infraestructura básica que les permita desarrollarse de manera sostenible.